

DRC CONSEJO
DANÉS PARA
REFUGIADOS

DRC
COLOMBIA

**Monitoreo de
Protección**

Enero a Marzo 2026



Financiado por
la Unión Europea
Ayuda Humanitaria

Este documento abarca las actividades de ayuda humanitaria con la asistencia financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en él no deben interpretarse en modo alguno como opinión oficial de la Unión Europea. La Comisión Europea no se hace responsable del uso que se pueda hacer de la información contenida en el documento.

Contenido

1. Introducción	3
2. Hallazgos principales	4
3. Actualización de contexto	5
4. Metodología	9
5. Riesgos de Protección	11
5.1. Desplazamiento forzado	11
5.2. Ataques contra la población civil	17
5.3. Violencias basadas en género	20
5.4. Denegación del acceso a servicios: barreras de acceso a la información	23
6. Recomendaciones	26

1. Introducción

Este informe presenta los hallazgos del Monitoreo de Protección (MP) realizado por DRC en Colombia entre enero y marzo de 2026 en los departamentos de La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Bolívar. A través de encuestas a hogares, entrevistas a actores clave, grupos focales y observación directa, el MP busca identificar riesgos de protección, violaciones de derechos humanos, así como comprender las capacidades y estrategias de afrontamiento de la población refugiada, migrante, desplazada interna, retornada y sin movilidad afectada por el conflicto armado.

Los hallazgos contribuyen a informar la respuesta humanitaria en curso y futura, permitir la identificación de personas en situación de mayor riesgo para brindar apoyo individualizado y fortalecer la incidencia basada en evidencia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de deberes en materia de protección de la población afectada.

Contacto:

Luca Cafagna

Director de Programas
DRC Colombia

Email: luca.cafagna@drc.ngo



2. Hallazgos principales

- ▶ El 60% de los hogares encuestados reportó haber sufrido al menos un abuso durante el primer trimestre de 2026, siendo el desplazamiento forzado el principal (70%). La mayoría de los hechos fue atribuida a Grupos Armados No Estatales (GANE) (83%), mientras que el 9% señaló a actores estatales civiles y el 3% a actores estatales militares.
- ▶ El 72% de los hogares reportó la existencia de riesgos de protección en su entorno actual, destacando el robo (33%), amenazas e intimidación (26%), desplazamiento forzado (21%), extorsión (19%) y negación de recursos (13%). A nivel territorial, el robo predomina en Cúcuta, Riohacha y Maicao, las amenazas en El Tarra y Sardinata, y el desplazamiento en Tibú y Arenal, mientras que en Nariño predominan las amenazas de violencia.
- ▶ Entre los hogares desplazados, el 76% continúa expuesto a riesgos en su lugar de residencia actual, con el riesgo de nuevo desplazamiento entre las mayores preocupaciones (27%). Además, el 95% identifica riesgos en caso de retorno, incluyendo un aumento del 16% en el riesgo contra la vida en comparación con el trimestre anterior.
- ▶ El 36% de las personas encuestadas presenta al menos una condición de vulnerabilidad que incrementa su exposición a riesgos de protección. Las más frecuentes incluyen condiciones médicas graves o crónicas (29%), discapacidad (26%), falta de documentación migratoria (26%) y hogares monoparentales (18%), factores que limitan significativamente la capacidad de respuesta y recuperación.
- ▶ Los retornos no seguros se consolidan como una estrategia recurrente de afrontamiento del desplazamiento, impulsada por la precariedad en los lugares de acogida y la ausencia de garantías de seguridad en origen, lo que perpetúa ciclos de movilidad forzada.
- ▶ Los ataques contra la población civil evidencian una creciente diversificación y sofisticación de la violencia, incluyendo el uso de drones, artefactos explosivos y prácticas de castigo ejemplarizante, con impactos directos sobre la vida, la integridad y el acceso a servicios. El uso de drones combina funciones de vigilancia, intimidación y ataque directo.
- ▶ Las violencias basadas en género (VBG) se mantienen como un riesgo transversal y subregistrado, utilizado por actores armados como mecanismo de control territorial, mediante dinámicas de coerción y explotación que afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes. El temor a represalias, la estigmatización y la desconfianza institucional continúan generando un subregistro significativo.
- ▶ El 93% de los casos de negación de recursos y servicios ocurrió en instituciones públicas. Las

personas afectadas presentan altos niveles de vulnerabilidad, incluyendo hogares monoparentales (27%), condiciones médicas graves o crónicas (43%), discapacidad (19%) y mujeres gestantes o lactantes (19%).

► Las barreras de acceso a la información constituyen una limitación estructural para el ejercicio de derechos, especialmente en contextos de baja conectividad, debilidad institucional y control territorial, generando desinformación, trámites fallidos y exclusión.



3. Actualización de contexto

Durante el primer trimestre de 2026, los cuatro territorios analizados (Nariño, Sur de Bolívar, La Guajira y Norte de Santander) evidencian una persistencia y, en varios casos, agudización de las dinámicas de conflicto armado asociadas a la disputa territorial entre GANE, con impactos diferenciados pero recurrentes sobre la población civil. A nivel nacional, entre enero y febrero de 2026, cerca de 101.200 personas resultaron afectadas por el accionar de estos grupos, en un contexto de expansión territorial de la violencia y deterioro sostenido de las condiciones de protección¹. En este periodo se registraron 28 emergencias humanitarias masivas en 8 departamentos, que afectaron a aproximadamente 20.839 personas,

incluyendo 6.306 personas desplazadas y 14.533 confinadas, con una frecuencia cercana a una emergencia cada dos días y un promedio de 360 personas afectadas diariamente².

Estas tendencias se ven corroboradas por el incremento sostenido de los eventos de confinamiento y desplazamiento forzado documentados por la Defensoría del Pueblo y ACNUR, que advierten un deterioro significativo de la situación de protección en el país durante el primer trimestre de 2026, incluyendo un aumento de comunidades en confinamiento prolongado y desplazamientos masivos asociados a la confrontación armada y al control territorial por parte de GANE³. En conjunto, estas

1. OCHA, “Colombia: Informe de Situación Humanitaria 2026 | Datos acumulados entre enero y febrero de 2026”, 14 de abril de 2026, [disponible aquí](#).

2. Ibid.

3. Defensoría del Pueblo, “Defensoría del Pueblo y ACNUR alertan sobre agravamiento del confinamiento en Colombia”, 24 de abril de 2026, [disponible aquí](#).

entidades señalan una profundización de las restricciones a la movilidad y del acceso humanitario, particularmente en zonas rurales y de difícil acceso, donde la respuesta institucional continúa siendo limitada o intermitente. En paralelo, se registra un aumento del 75% en eventos asociados al uso de artefactos explosivos improvisados frente al periodo enero-febrero de 2025 (de 68 a 119), con afectación a más de 5.100 personas y expansión geográfica hacia regiones como Sur de Bolívar, Antioquia, Arauca y Huila⁴. Asimismo, las comunidades étnicas continúan siendo desproporcionadamente afectadas, representando al menos el 12% de las personas impactadas, con alta concentración de afectaciones prolongadas en territorios afrocolombianos e indígenas⁵.

De manera concomitante, se identifican factores institucionales, climáticos y socioeconómicos que incrementan la exposición de la población a riesgos de protección, incluyendo desplazamientos forzados, confinamientos, ataques directos y restricciones de movilidad. Las lluvias atípicas en una temporada históricamente seca han generado una doble afectación en contextos ya impactados por el conflicto, con más de 448.500 personas afectadas en 23 departamentos entre enero y febrero⁶. En este escenario, se anticipa una persistencia de la presión sobre la población civil en el marco del control territorial, a lo que se suma el contexto

electoral (marzo–mayo de 2026), identificado por la Misión de observación Electoral como factor adicional de riesgo en 185 municipios por la convergencia de violencia y riesgos de fraude⁷.

Durante el periodo, **Nariño** ha presentado una combinación de dinámicas de conflicto armado, choques institucionales en el marco del proceso de paz y una emergencia climática de alta magnitud, que en conjunto han configurado un escenario de presión humanitaria simultánea. En el marco del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y un GANE, el 15 de marzo de 2026 se registró el asesinato de un vocero de la delegación de paz en zona rural de Tumaco, hecho que generó tensiones entre las partes y la paralización del séptimo ciclo de negociaciones, debilitando la confianza en el proceso⁸. En paralelo, se registraron operativos sostenidos de la Fuerza Pública contra estructuras armadas en el litoral Pacífico, incluyendo la destrucción de laboratorios de pasta base de coca⁹, la incautación de material de guerra¹⁰ y la neutralización de explosivos¹¹ en municipios como Tumaco, Olaya Herrera, Mosquera, El Charco y Roberto Payán, lo que evidencia la continuidad de la confrontación armada en la región.

En materia humanitaria, la temporada de lluvias generó una emergencia significativa por inundaciones y desbordamiento del río Iscuandé desde finales de enero, afectando aproximadamente a 8.500

4. OCHA, “Colombia: Informe de Situación Humanitaria 2026 | Datos acumulados entre enero y febrero de 2026”, 14 de abril de 2026, [disponible aquí](#).

5. Ibid.

6. Ibid.

7. Ibid.

8. La Silla Vacía, “MinDefensa desmiente a CNEB y dice que no abatió a ‘Machaco’”, 16 de marzo de 2026, [disponible aquí](#).

9. Infobae, “La Armada de Colombia destruyó al menos 30 laboratorios en Nariño y Cauca: más de \$1.400 millones en pérdidas para el narcotráfico”, 26 de marzo de 2026, [disponible aquí](#).

10. Caracol Radio, “Ejército incauto arsenal de guerra en Nariño”, 2 de marzo de 2026, [disponible aquí](#).

11. Policía Nacional de Colombia, “Contundente operación contra las estructuras criminales en Nariño”, 5 de marzo de 2026, [disponible aquí](#).

personas en municipios como Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera, Samaniego y La Florida¹². La afectación fue especialmente severa en comunidades étnicas afrodescendientes e indígenas Eperara Siapidaara, con daños a viviendas, cultivos e infraestructura esencial, incluyendo vías, acueductos, centros de salud y escuelas. Esta emergencia profundizó condiciones preexistentes de vulnerabilidad, generando una doble afectación en comunidades ya impactadas por el conflicto armado, con impactos en movilidad, acceso a servicios y mayores riesgos de protección.

El **Sur de Bolívar** evidencia una profundización del deterioro de la situación humanitaria y de seguridad, caracterizada por desplazamientos forzados, confinamientos prolongados y expansión del control territorial por actores armados. Se registraron desplazamientos masivos en municipios como Arenal y Santa Rosa del Sur, junto con confinamientos persistentes en Montecristo, Tiquisio y otras zonas rurales, afectando a más de 3.200 familias en la subregión. La Defensoría del Pueblo reporta además una intensificación de la violencia letal y del control coercitivo, con al menos 40 homicidios en 2025 y 18 adicionales en lo corrido de 2026, así como extorsiones sistemáticas, amenazas a liderazgos sociales y regulación armada del comportamiento comunitario¹³. En marzo, se documentaron retenes ilegales, despojo de bienes y hechos de violencia directa en corredores estratégicos, incluyen-

do el hallazgo de múltiples cuerpos en zona rural de Santa Rosa del Sur¹⁴.

Asimismo, se observa una diversificación de los métodos de violencia, incluyendo el uso de drones y artefactos explosivos en ataques contra infraestructura estatal y zonas pobladas, lo que evidencia una expansión de las capacidades tácticas de los actores armados. En este contexto, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 003 de 2026¹⁵, señalando un escenario de riesgo crítico asociado a la disputa por corredores estratégicos entre los ríos Magdalena y Cauca, vinculados a economías ilícitas como la minería ilegal, el narco tráfico y la extorsión.

La **Guajira** mantiene un contexto de alta inestabilidad, caracterizado por la persistencia del conflicto armado y la disputa territorial entre estructuras armadas, en interacción con economías ilícitas y condiciones estructurales de vulnerabilidad. Entre finales de diciembre de 2025 y marzo de 2026 se reportaron desplazamientos forzados de comunidades indígenas Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta, incluyendo el desplazamiento total de la comunidad de La Múkura, lo que evidencia afectaciones tanto humanitarias como culturales y territoriales¹⁶.

En términos de seguridad, durante el mes de enero de 2026 se registraron aproximadamente 43 homi-

12. OCHA, "Alerta de situación humanitaria: Inundación y deslizamientos en los municipios de Santa Bárbara de Iscuandé, La Florida, Olaya Herrera y Samaniego (Nariño)", 29 de enero de 2026.

13. Defensoría del Pueblo, "Defensoría del Pueblo hace llamado urgente a la institucionalidad ante persistente crisis de derechos humanos en el sur de Bolívar", 27 de marzo de 2026, [disponible aquí](#).

14. Análisis Urbano, Agencia de Prensa, "Hallazgo masivo de cadáveres genera alarma en el Sur de Bolívar", 21 Marzo 2026, [disponible aquí](#).

15. Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana N°003-2026 – De Inminencia, 29 de enero de 2026, [disponible aquí](#).

16. La Guajira Noticias, "ONU alerta sobre crisis humanitaria en La Guajira por combates entre grupos armados ilegales", 7 de enero de 2026, [disponible aquí](#).

cidios en el departamento, con concentración en Riohacha, Maicao y San Juan del Cesar¹⁷. Hechos como la masacre de cinco personas en Maicao (9 de enero) y el ataque armado en Riohacha (31 de enero) que dejó tres personas fallecidas incluso dos menores de edad¹⁸ reflejan la persistencia de violencia letal asociada a disputas entre estructuras armadas. Estas dinámicas se traducen en restricciones a la movilidad, aumento del miedo comunitario y debilitamiento del tejido social, con efectos directos sobre la participación comunitaria y el subregistro de hechos violentos.

En paralelo, persisten barreras estructurales de acceso a servicios e información, particularmente en sectores de salud y educación, donde la falta de sistemas de registro adecuados y la fragmentación institucional limitan la identificación de afectaciones. Casos como la existencia de cerca de 993 sedes educativas sin georreferenciación evidencian brechas estructurales que afectan la planificación y el acceso efectivo a derechos¹⁹.

En **Norte de Santander**, el **Catatumbo** presenta el escenario de mayor agudización del conflicto armado en el periodo analizado, con una crisis de protección de carácter prolongado. La confrontación entre dos GANE, junto con la expansión de otros actores armados hacia municipios como Ocaña y Ábrego, ha generado un aumento sostenido de la violencia desde 2025, con un punto de inflexión

en enero de ese año y una intensificación progresiva hasta marzo de 2026²⁰. Durante el trimestre, se registraron ataques recurrentes contra la población civil, desplazamientos forzados y confinamientos masivos. Un elemento central del contexto es la incorporación de drones como herramienta de vigilancia y ataque, lo que ha transformado la naturaleza del conflicto al hacerlo más impredecible y extendido a zonas previamente no afectadas. Asimismo, ataques como el carro bomba en Ocaña²¹ y la instalación de retenes ilegales evidencian la expansión territorial y la sofisticación de las modalidades de violencia. Se reporta además la existencia de confinamientos prolongados en múltiples veredas, con restricciones totales de movilidad y acceso humanitario, afectando significativamente el acceso a servicios básicos y medios de vida. La disputa por corredores estratégicos vinculados a economías ilícitas (como la vía Tibú-La Gabarra y Filo Gringo) continúa siendo un factor estructural del conflicto, afectando de manera directa a población campesina, indígena (Barí y Yukpa), liderazgos sociales y población civil en general.

De manera complementaria, Cúcuta se consolida como centro receptor de población desplazada proveniente del Catatumbo, al tiempo que registra dinámicas de desplazamiento intraurbano asociadas a la presencia y accionar de actores armados en zonas periféricas, lo que incrementa la presión sobre la oferta institucional y los servicios de atención.

17. Diario del Norte, “Enero violento: 43 homicidios se registraron en el departamento de La Guajira - Riohacha y Maicao registran el mayor número de muertos”, 3 de febrero de 2026, [disponible aquí](#).

18. Guajira News, “Triple homicidio y un herido deja ataque armado en la invasión del barrio Los Cerezos, en Riohacha”, 31 de enero de 2026, [disponible aquí](#).

19. Infobae, “Gobierno geolocaliza casi 1.000 colegios en La Guajira que eran “invisibles”: no figuraban en el mapa”, 11 de marzo de 2026, [disponible aquí](#).

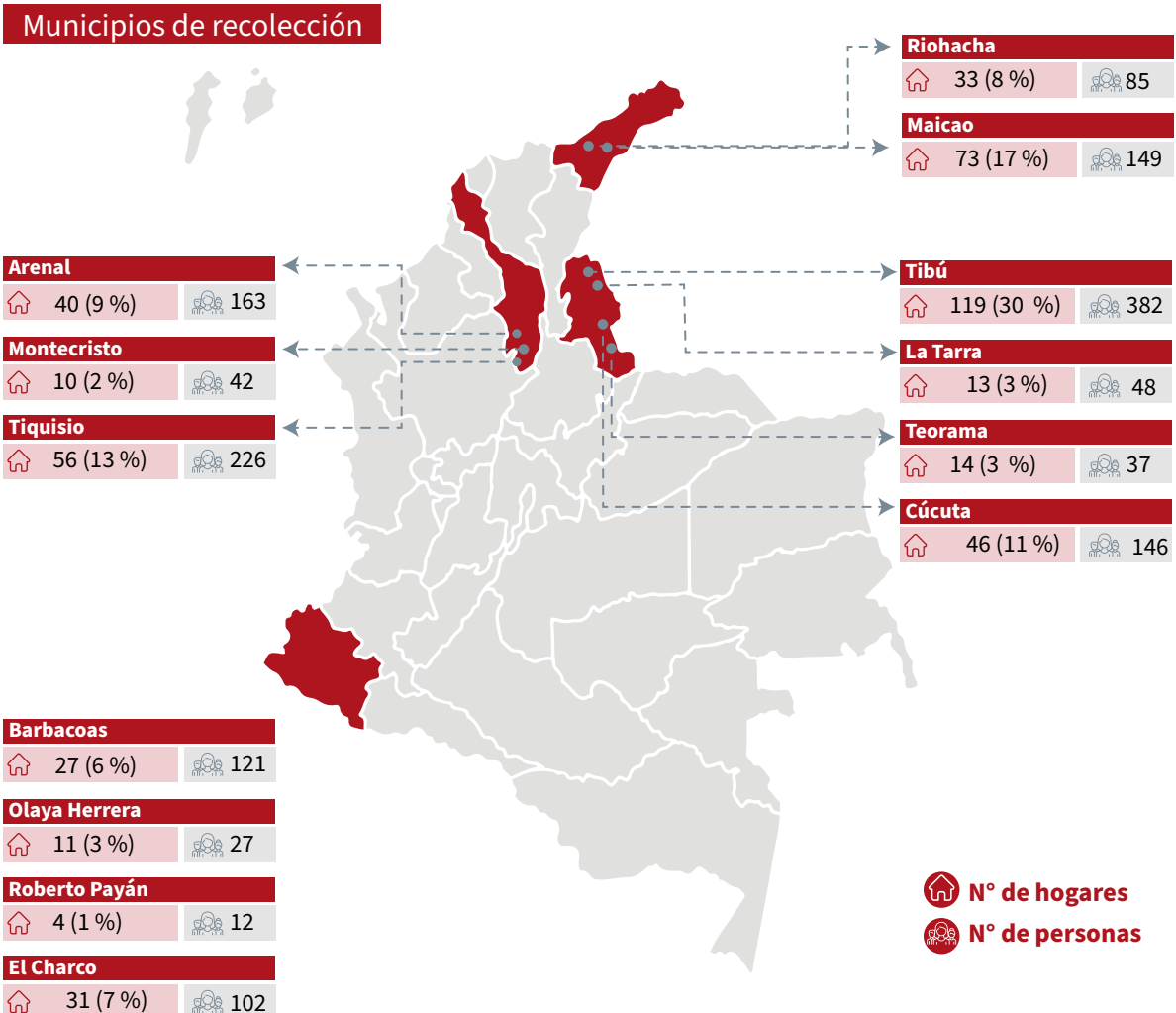
20. Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana N°007-2026 – De Inminencia, 5 de marzo de 2026, [disponible aquí](#).

21. Infobae, “Ataque con explosivos contra batallón en Ocaña deja cuatro heridos y revive alertas por violencia en Catatumbo”, 7 de febrero de 2026, [disponible aquí](#).

4. Metodología

La información del MP fue recopilada mediante un enfoque metodológico mixto, que combinó encuestas presenciales a hogares (EH), Entrevistas a actores Clave (EAC), Discusiones en Grupos Focales (DGF) y observación directa. Esta diversidad de métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, permitió obtener una comprensión más profunda

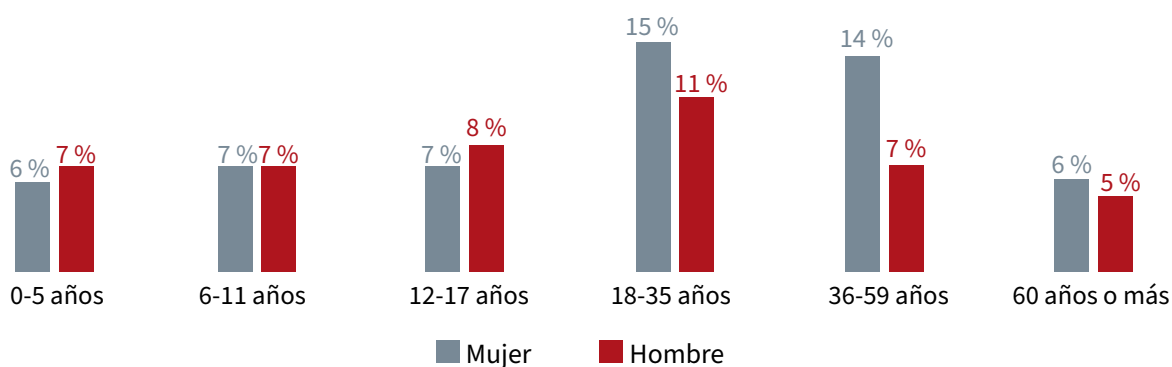
y detallada de las percepciones individuales y colectivas sobre necesidades, riesgos de protección y capacidades. La recolección de datos se complementó con la revisión de fuentes secundarias y con información recabada en espacios de coordinación a nivel local y nacional.



Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, los equipos de protección de DRC alcanzaron a 1.320 personas refugiadas, migrantes, desplazadas internas, retornadas y miembros de comunidades locales no desplazadas afectadas por el conflicto armado, tanto en zonas rurales como urbanas de La Guajira (20%), Norte de Santander (31%), Nariño (28%) y Bolívar (21%) entre herramientas cualita-

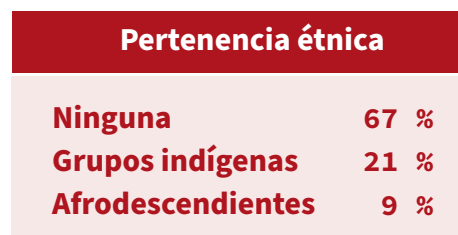
tivas y cuantitativas. Como parte de este alcance, participaron 399 hogares en la EH, representando a un total de 1.282 personas. La distribución por género fue equilibrada: 46% hombres y 54% mujeres. Por grupo etario, el 40% eran NNA (0-17 años) y el 60% personas adultas (18-59 años), de las cuales el 13% personas mayores (60 años o más).

Edad e identidad de género participantes



En relación con el tipo de movilidad, el 36% se encontraban en situación sin movilidad y afectados por situaciones de violencia, el 33% correspondían un perfil de desplazamiento forzado, el 30% de los hogares correspondían a población en destino y un 1% estaban en tránsito. En cuanto a la nacionalidad, el 72% eran de nacionalidad colombiana, el

25% venezolana y el 2% contaban con doble nacionalidad. Respecto a la pertenencia étnica, el 31% de las personas se autoidentificaron como indígenas y el 11% como afrodescendientes, siendo Nariño y La Guajira los de mayor representación indígena y Nariño con mayor proporción de personas afrodescendientes encuestadas.



Complementariamente, se realizó 1 DGF en Nariño con la participación de 13 personas, así como 25 EAC (dos en La Guajira, siete en Norte de Santan-

der, cuatro en Nariño y doce en Bolivar), dirigidas a representantes institucionales, liderazgos comunitarios y organizaciones internacionales.

5. Riesgos de Protección

5.1. Desplazamiento forzado

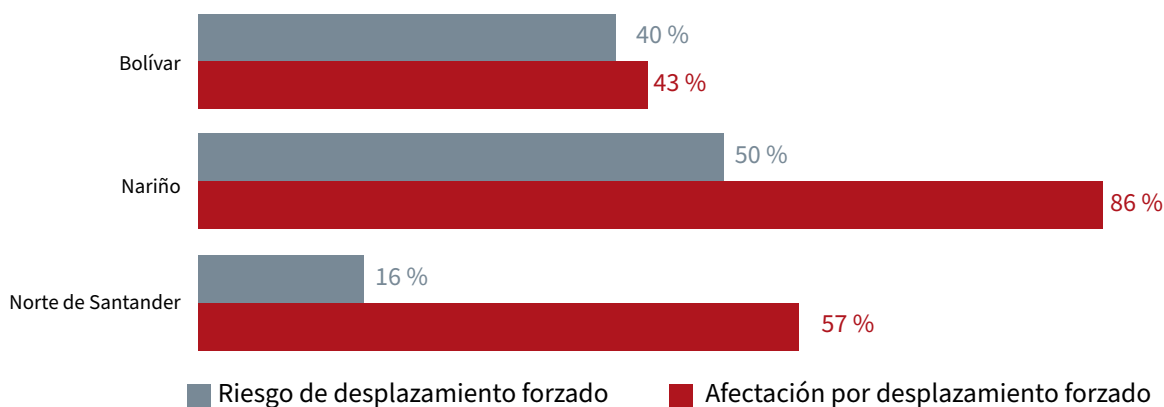
“Las amenazas, la intimidación, el miedo y la zozobra siempre están presentes, pero nos toca regresar. A veces volvemos por algunas semanas, cuando percibimos que la situación está más tranquila, pero luego tenemos que salir nuevamente.”
(EAC Nariño)

El desplazamiento forzado se mantiene como uno de los riesgos de protección más prevalentes en Nariño, Norte de Santander y el sur de Bolívar durante el primer trimestre del año, con una alta incidencia reportada en los ejercicios de monitoreo y una clara atribución a la acción de GANE. En Norte de Santander, el 69% de los casos de abuso reportados corresponden a desplazamiento forzado, mientras que en Nariño el 92% de las personas que reportaron abusos indicaron haber sido víctimas de

este hecho (86% en el trimestre anterior) y el 21% identificaron el desplazamiento forzado como un riesgo en su entorno, evidenciando una afectación generalizada en ambos contextos. En el sur de Bolívar, una tendencia al agravamiento se refleja en el aumento de personas que identifican el desplazamiento como amenaza (de 40% a 55%) y de quienes reportan haber sido víctimas (de 43% a 67%).

“Han tratado de imponer normas. Han llegado a hablarle brusco a la comunidad generando temor y presión para abandonar el territorio.” (EAC, Bolívar)

Los factores impulsores del riesgo presentan elementos comunes en los tres departamentos: la disputa por el control territorial, la persistencia de



economías ilícitas y el ejercicio de control social por parte de los grupos armados, mediante la imposición de normas coercitivas, restricciones a la movilidad y amenazas directas, generan una presión

constante que empuja a la población al desplazamiento como estrategia de protección. En Norte de Santander, el desplazamiento está fuertemente asociado a prácticas directas de desalojo violento,

que constituyen un mecanismo de expulsión inmediata. En estos casos, actores armados irrumpen en las viviendas y ordenan a las familias abandonar sus tierras bajo amenazas, especialmente en zonas rurales como Tibú, con el objetivo de consolidar el control territorial. A esto se suman los enfrentamientos entre GANE cada vez más cercanos a centros poblados, el uso de drones en dinámicas de combate, la presencia de artefactos explosivos, y restricciones severas a la movilidad que operan como un mecanismo progresivo de expulsión, al limitar los desplazamientos cotidianos hacia cabeceras municipales y generar señalamientos o interrogatorios que afectan directamente la seguridad de las personas. En algunos corregimientos, como Pacelli, este control se expresa además en normas de conducta y horarios restrictivos que reducen el acceso a medios de vida y servicios básicos, contribuyendo finalmente al desplazamiento hacia zonas urbanas u otros territorios. También inciden los riesgos de reclutamiento forzado y de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA), así como la extorsión en contextos urbanos como Cúcuta. En Nariño, estos factores convergen con dinámicas propias de territorios étnicos, donde el asesinato de liderazgos, las confrontaciones armadas y el riesgo de reclutamiento impulsan desplazamientos, en un contexto donde las comunidades resisten activamente la presión de actores armados para no abandonar sus territorios. Adicionalmente, en los tres contextos, el deterioro de las condiciones de vida en zonas de acogida y las barreras institucionales de acceso a derechos operan como factores agravantes y, en muchos casos, detonantes de nuevas movilidades.

“Nosotros hemos resistido, porque los grupos armados tiene un interés por el territorio y quieren que nos vayamos del territorio, pero hemos resistido porque si les hacemos caso perdemos nuestro territorio, a pesar de todas las amenazas y violencia sobre todo contra las autoridades y liderazgos del territorio.” (EAC Nariño)

Las manifestaciones del riesgo reflejan diferencias en los patrones de movilidad. En Norte de Santander, el desplazamiento combina eventos masivos súbitos con dinámicas progresivas de salida “gota a gota”, acompañadas de amenazas, intimidaciones y despojo de bienes como mecanismos de control. En términos de desplazamientos masivos, por ejemplo, se documentó el desplazamiento de 16 familias en la vereda El Retiro (Tibú) en febrero y de 87 personas desde Filo Gringo en marzo. En Nariño, aunque se registra una disminución en la magnitud de eventos masivos respecto al trimestre anterior, persiste una alta prevalencia del desplazamiento a nivel individual y familiar, así como dinámicas de movilidad pendular y retornos no seguros. En este contexto, durante el trimestre se registró un evento de desplazamiento en el municipio de Barbacoas (resguardo Awá Tortugaña Telembí), desencadenado por el asesinato de un liderazgo y guardia indígena, que afectó a 23 familias (63 personas) desplazadas principalmente hacia Ricaurte. Este hecho, aunque de menor escala en comparación con el trimestre anterior (cuando un desplazamiento masivo en El Charco afectó a 1.050 personas), confirma la persistencia del impacto sobre comunidades indígenas, en particular el pueblo Awá. En el sur de Bolívar, el desplazamiento se manifiesta tanto en eventos masivos – como en Arrenal donde se registraron el desplazamiento masivo de aproximadamente 180 personas durante el trimestre – como



en desplazamientos individuales y familiares hacia zonas cercanas o cabeceras municipales.

La afectación se concentra en grupos con vulnerabilidades específicas, con perfiles diferenciados entre territorios. En Norte de Santander, destacan mujeres jóvenes cabeza de hogar en contextos de crianza unitaria, población campesina y migrantes venezolanos en situación irregular, además de NNA en riesgo de reclutamiento. En Nariño, la afectación se concentra principalmente en comunidades étnicas (indígenas Awá y afrodescendientes), en un contexto donde los hogares que reportaron desplazamiento forzado presentan altos niveles de vulnerabilidad, incluyendo discapacidad (45,6%), presencia de adultos mayores (24,6%) y personas con condiciones médicas graves (21,1%), lo que limita significativamente su capacidad de adaptación en contextos de desplazamiento e incrementa

su exposición a nuevos riesgos. En ambos Norte de Santander y Nariño, mujeres, niñas y lideresas enfrentan riesgos diferenciados de VBG, mientras que los hogares monoparentales enfrentan mayores barreras para sostener medios de vida en zonas de acogida. En el **sur de Bolívar**, las restricciones a la movilidad y la pérdida de medios de vida afectan de manera diferenciada a hogares con alta dependencia de economías rurales, incrementando su vulnerabilidad al desplazamiento.

“Somos indígenas y este es nuestro territorio. En las zonas de acogida uno tiene que pagar por todo, y las familias no cuentan con los recursos suficientes. Las personas mayores sufren mucho al estar lejos de su tierra, los jóvenes no se adaptan, y las familias no pueden permanecer juntas porque suelen ser numerosas, por lo que terminan separándose.”

(EAC Nariño)

Los impactos del desplazamiento son profundos y multidimensionales en los tres departamentos.

A nivel psicosocial, se reportan afectaciones generalizadas como ansiedad, miedo constante, insomnio y síntomas de estrés postraumático. A nivel económico, se evidencia pérdida de bienes, medios de vida y deterioro de las condiciones de subsistencia, incluyendo venta forzada de activos para financiar el desplazamiento. En **Nariño**, estos impactos incluyen además procesos de desarmozación territorial y cultural en comunidades indígenas, afectando la cohesión social y la transmisión de prácticas culturales. En los tres contextos, se observan dinámicas de separación familiar e interrupción del acceso a educación, con un 35% de NNA desplazado(a)s fuera del sistema escolar.

“Las condiciones siempre son difíciles: llegar a un lugar donde no se conoce a nadie, sin saber a quién pedir ayuda. Para poder comer hay que

comprar todo y es caro. Si uno llega a casa de familiares, lo ayudan solo por unos días; luego le dicen que se vaya o que ayude a pagar servicios, pero no hay de dónde. Cuando salimos la primera vez, muchos no denunciaron por temor, porque nos dijeron que ellos sabían si íbamos a hacerlo.

A una adulta mayor incluso le advirtieron que tuviera cuidado si regresaba por allá. Ella nunca denunció y ahora está sola, sin apoyo de nadie.”
(EAC Nariño)

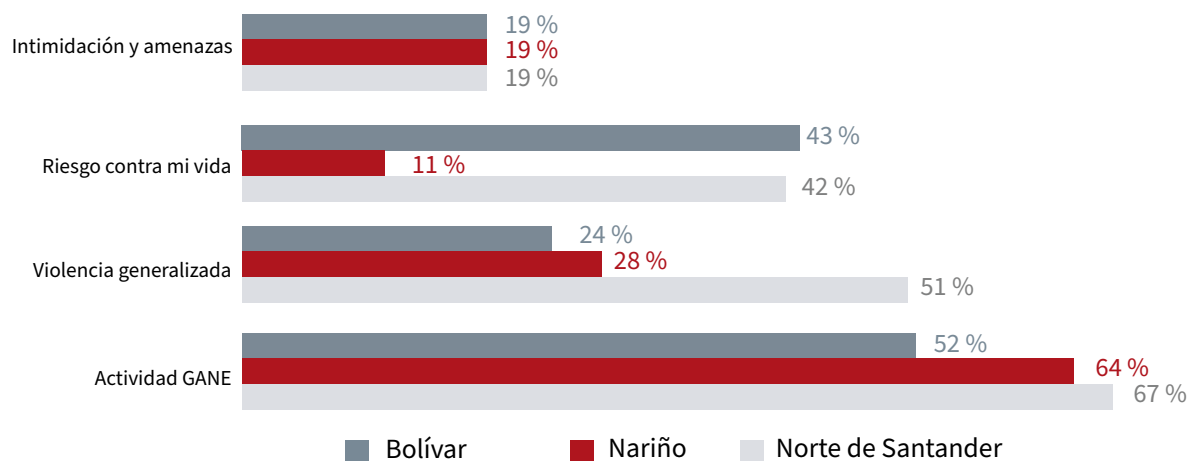
En este contexto, los retornos no seguros emergen como una consecuencia crítica y transversal del desplazamiento forzado, impulsados tanto por la imposibilidad de sostener condiciones de vida en los lugares de acogida – especialmente en términos de alimentación, vivienda y medios de subsistencia – como por percepciones de mejora temporal en la seguridad, más que por cambios estructurales en el contexto. En **Nariño**, comunidades indígenas y afrodescendientes señalan ade-



más la necesidad de retornar para evitar la pérdida definitiva del territorio, a pesar de la persistencia de riesgos y la falta de acompañamiento institucional. Estos retornos tienen lugar en contextos donde los riesgos de protección permanecen elevados. Los hogares identifican como principales obstáculos al retorno la presencia y actividades de los GANE (68% en Bolívar, 56% en Norte de Santander y 39% en Nariño), la amenaza contra la vida (49% en Norte de Santander, 48% en Nariño y 36% en Bolívar), la inseguridad generalizada (33% en Nariño, 18% en Norte de Santander y 14% en Bolívar) y las amenazas de violencia (28% en Norte de Santander, 18% en Bolívar y 13% en Nariño). En conjunto, estos elementos evidencian que los procesos de retorno se desarrollan sin condiciones adecuadas de seguridad

ni garantías de protección, lo que contribuye a consolidar ciclos de movilidad forzada y exposición reiterada al riesgo. Además, se realizan con escaso o nulo acompañamiento institucional y, en algunos casos, dicho acompañamiento es percibido como un factor de riesgo adicional por posibles represalias de actores armados.

“Las condiciones en las ciudades son muy difíciles y el costo de vida es alto; no es posible sostener la alimentación ni los medios de subsistencia, como los animales. Por ello, como comunidad decidimos formalizar el resguardo y organizarnos para iniciar el retorno. Sin embargo, este proceso ha sido complejo debido a la falta de ayuda y acompañamiento. Aun así, consideramos necesario regresar ahora que la situación parece más tranquila, ya que, de lo contrario, podríamos perder definitivamente el acceso a nuestro territorio.” (EAC Nariño)



La respuesta institucional presenta brechas estructurales significativas en los tres territorios, aunque con características diferenciadas. En **Norte de Santander**, se evidencian limitaciones críticas en la capacidad estatal, incluyendo la suspensión de transferencias de asistencia humanitaria de emer-

gencia por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en El Tarra, debido a un problema administrativo en la renovación del convenio con el operador de pagos, lo que ha dejado sin apoyo a familias desplazadas durante varios meses. Además, los municipios re-

ceptores enfrentan capacidades desbordadas. En **Nariño**, si bien existen planes de retorno y compromisos institucionales, su implementación es limitada y el acompañamiento insuficiente, especialmente en medios de vida y atención psicosocial. En el **sur de Bolívar**, la respuesta institucional presenta una baja capacidad de prevención y atención oportuna, en un contexto de débil presencia estatal y restricciones de acceso derivadas del control territorial de actores armados. De manera transversal, en los **tres departamentos** se identifican barreras persistentes de acceso a la justicia, asociadas principalmente al temor a represalias por parte de actores armados, la desconfianza institucional, la limitada presencia estatal en zonas rurales y la percepción de baja efectividad de los procesos de denuncia. En conjunto, estas limitaciones han contribuido a una pérdida de confianza por parte de las comunidades afectadas, quienes perciben una ausencia de respuesta efectiva por parte de las instituciones, incluso en escenarios de retorno. Como lo expresa un actor clave en Nariño: “Hemos perdido confianza en la institución porque no hacen nada para ayudarnos; a pesar de volver, seguimos teniendo temor y zozobra.” En este contexto, la respuesta humanitaria internacional constituye el principal soporte para la atención de la población afectada, aunque enfrenta restricciones de financiamiento.

Las estrategias adoptadas por la población responden a distintos momentos del proceso, evidenciando tanto mecanismos de resiliencia como prácticas de alto riesgo. En el **sur de Bolívar**, predominan estrategias orientadas a mitigar el riesgo o retrasar el desplazamiento, en un contexto

de confinamiento y restricciones prolongadas. Las comunidades recurren a la movilidad temporal hacia zonas cercanas, al traslado a cabeceras municipales o a fincas en áreas percibidas como más seguras, así como a estrategias de preparación anticipada como el almacenamiento de alimentos ante posibles bloqueos o limitaciones de acceso. En Nariño y Norte de Santander, una vez el desplazamiento ocurrido, los hogares recurren de manera prioritaria a redes familiares y comunitarias para asegurar alojamiento y apoyo inmediato. En **Nariño**, estas redes están fuertemente ancladas en estructuras comunitarias, donde liderazgos locales y familiares constituyen los principales mecanismos de apoyo, permitiendo gestionar el desplazamiento en el corto plazo, aunque con limitaciones en términos de sostenibilidad. En **Norte de Santander**, además del apoyo social, se identifican estrategias orientadas al restablecimiento de medios de vida, incluyendo la movilidad hacia zonas con mayores oportunidades económicas, como áreas mineras en veredas como Los Higueros y Las Ceibas (Sardinata); sin embargo, estas alternativas implican una exposición adicional a riesgos asociados a la presencia de actores armados y economías ilícitas.

De manera transversal, estas estrategias son mayoritariamente informales, reactivas y limitadas en el tiempo. En un contexto marcado por la insuficiencia de la respuesta institucional, esto favorece la adopción de mecanismos que incrementan la exposición a nuevos riesgos de protección, como los retornos no seguros – perpetuando ciclos de desplazamiento –, la movilidad pendular entre zonas de riesgo y recepción, el endeudamiento y la reducción del

consumo de alimentos. En **Norte de Santander**, se identifican además estrategias de alto riesgo como el recurso a economías ilícitas, el sexo transaccional o la vinculación con actores armados, lo que refleja un deterioro progresivo de las condiciones de protección y de las capacidades de afrontamiento de los hogares.

En relación con el retorno, en **Norte de Santander**, las comunidades implementan mecanismos de monitoreo de las condiciones de seguridad en los lugares de origen, mediante verificaciones periódicas sobre la presencia de actores armados, lo que permite orientar decisiones de retorno, aunque en contextos de alto riesgo. En **Nariño**, destacan los sistemas organizativos liderados por autoridades étnicas, incluyendo guardias indígenas y otras for-

mas de organización local, que facilitan retornos progresivos mediante sistemas informales de monitoreo y alerta. En comunidades afrodescendientes, los retornos suelen ser graduales y fragmentados, iniciando con el retorno de algunas familias para evaluar condiciones antes de que otras se sumen. Como lo describe un actor clave: “Como resguardo nos hemos organizado para que la llegada sea segura (...) dejando un control en la entrada para vigilar y avisar si ocurre algo extraño.” En los **tres territorios**, si bien estas estrategias permiten reducir riesgos inmediatos y facilitar la toma de decisiones, también reflejan la persistencia de condiciones de inseguridad y la ausencia de acompañamiento institucional efectivo.



5.2. Ataques contra la población civil

El riesgo de ataques a la población civil, incluyendo ataques a bienes de propiedad civil, asesinatos selectivos, amenazas e intimidaciones, se mantiene presente en los territorios monitoreados durante el primer trimestre del año, evidenciando patrones persistentes de control territorial coercitivo ejercido por los GANE. Los datos cuantitativos del monitoreo de protección en los cuatro departamentos muestran que los ataques directos contra bienes afectaron al 5% de la población encuestada, mientras que las intimidaciones y amenazas alcanzaron al 33% de los casos de abuso, lo que confirma un sistema integrado de violencia contra la población civil.

En **Norte de Santander**, los ataques se caracterizan por su alta letalidad, diversificación de medios y progresiva expansión territorial. Destaca el uso

de drones como mecanismo emergente, no solo por su capacidad de causar daños físicos (lesiones graves, afectación a viviendas y pérdida de bienes productivos), sino también por su impacto en la generación de miedo constante y en la alteración de las dinámicas comunitarias. Su utilización incluye tanto ataques directos como sobrevuelos con fines intimidatorios, mediante los cuales se emiten mensajes para forzar el desplazamiento de la población, evidenciando un uso deliberado de la tecnología como herramienta de control territorial. En este sentido, según un actor clave, se identifica un patrón recurrente según el cual la reanudación de actividades comunitarias (particularmente la asistencia escolar) coincide con la intensificación de estos ataques, lo que dificulta la estabilización de la vida comunitaria. Asimismo, se registran bombar-

deos con munición convencional en zonas rurales del Catatumbo sin previo aviso a la población civil, lo que incrementa el riesgo de afectaciones indiscriminadas y refuerza dinámicas de confinamiento. Estos eventos, sumados a la presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos, configuran un entorno de riesgo permanente que limita la movilidad, restringe el acceso a medios de vida y expone a la población a incidentes letales incluso en actividades cotidianas.

“Ahora con lo de los drones el miedo es constante. Apenas se escuchan la gente ya no sabe qué hacer, unos dicen que hay que quedarse en la casa y otros salen corriendo a la montaña a esconderse.” (EAC, Norte de Santander)

Otro elemento central es el uso de la violencia como mecanismo de control social directo, mediante amenazas, saqueos y despojo de bienes, particularmente contra familias campesinas, con el objetivo de forzar el abandono de tierras y reconfigurar el control territorial. Estas prácticas no solo afectan los medios de vida, sino que generan un entorno de coerción permanente que limita la capacidad de las comunidades para resistir o denunciar. A ello se suman desapariciones forzadas y ejecuciones de civiles, frecuentemente basadas en señalamientos no verificados o en vínculos indirectos con actores armados. Estos hechos evidencian prácticas de castigo ejemplarizante, en las que los actores armados imponen sanciones letales sin ningún tipo de verificación, con el objetivo de disciplinar a la población y regular su comportamiento. Este tipo de violencia no solo elimina a las personas señaladas, sino que genera un efecto disuasivo más amplio, reforzando el control social a través del miedo y limitando las interacciones sociales, la movilidad y la participa-

ción comunitaria. Asimismo, se identifica la persecución de liderazgos sociales, incluyendo formas de violencia digital dirigidas especialmente contra mujeres lideresas, mediante acusaciones de colaboración con actores armados que buscan deslegitimar su rol y fracturar la confianza comunitaria.

“A nosotros nos ha tocado salir desplazados varias veces, nos han confinado y también hemos visto cómo saquean las fincas y se llevan todo.”
(EAC, Norte de Santander)

En **La Guajira**, persisten amenazas y asesinatos asociados a disputas entre estructuras armadas y redes criminales vinculadas a economías ilegales. La afectación se concentra en zonas urbanas y periurbanas de municipios como Riohacha, Maicao y San Juan del Cesar, donde la presencia de actores armados y redes criminales incrementa la percepción de inseguridad y control social. En este contexto, se reportan asesinatos selectivos, así como la presencia de hombres armados no identificados en barrios que realizan labores de vigilancia. Asimismo, se registran hechos violentos asociados a retaliaciones y disputas entre actores armados y redes criminales, en el marco de la competencia por el control territorial y las economías ilícitas, con impactos directos sobre la población civil.

En **La Guajira**, la afectación se concentra especialmente en hombres jóvenes entre 18 y 30 años, quienes presentan mayor exposición a hechos de violencia directa, como asesinatos selectivos y amenazas, en el marco de disputas entre actores armados y redes criminales por el control territorial y las economías ilícitas. En **Norte de Santander**, si bien la exposición al riesgo es generalizada, se identifican grupos con afectaciones diferencia-

das, entre ellos jóvenes señalados por presuntos vínculos (incluso indirectos) con actores armados, líderes comunitarios visibles, familias ubicadas en zonas geográficamente más expuestas a ataques (particularmente mediante drones), así como mujeres, NNA y personas mayores, cuya menor capacidad de reacción incrementa su vulnerabilidad frente a estos hechos.

Las consecuencias del riesgo son multidimensionales. En ambos contextos se evidencian afectaciones directas a la vida e integridad de la población civil, incluyendo muertes y lesiones asociadas a ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos. A ello se suman impactos en el acceso a servicios esenciales, como interrupciones educativas, restricciones de movilidad y debilitamiento de la oferta de salud en zonas afectadas, derivados de la recurrencia de ataques contra la población civil, la presencia de artefactos explosivos y las condiciones de inseguridad que limitan el funcionamiento de servicios básicos. En **Norte de Santander**, la recurrencia de ataques (incluyendo el uso de drones, artefactos explosivos y hostilidades cercanas a centros poblados) ha generado entornos de alta inseguridad que han provocado el cierre de instituciones educativas (por ejemplo, 8 en Filo Gringo y 8 en Orú), la interrupción de servicios de salud en zonas rurales y la reducción de la presencia institucional, afectando directamente el acceso de la población a servicios básicos. En **La Guajira**, los hechos de violencia han contribuido principalmente al confinamiento parcial de comunidades, la restricción de la movilidad y la reducción de actividades económicas cotidianas. A nivel psicosocial, en ambos territorios se registran afectaciones como miedo constante, ansiedad, hi-

pervigilancia y estrés sostenido en adultos, niñas y niños, con impactos visibles en la vida comunitaria.

Las estrategias de afrontamiento son principalmente reactivas y orientadas a la adaptación al riesgo inmediato. En ambos territorios, las redes locales y familiares funcionan como canales clave de circulación de información sobre riesgos, a partir de los cuales los hogares ajustan su movilidad y rutinas cotidianas. En **La Guajira**, se destaca el rol de líderes comunitarios y Juntas de Acción Comunal, así como la conformación de comités de seguridad, que facilitan la articulación con autoridades y la activación de rutas de atención. Estas estructuras cumplen un papel clave en la difusión de información sobre hechos violentos, la activación de alertas tempranas y la promoción de medidas de autoprotección, como la restricción de la movilidad y la modificación de horarios en las actividades cotidianas. En **Norte de Santander**, estas estrategias incluyen también prácticas concretas de autoprotección frente a ataques aéreos y terrestres, así como mecanismos informales de monitoreo comunitario del riesgo. Por ejemplo, se reportan protocolos ante el uso de drones, como evitar la circulación en días nublados debido a la menor visibilidad de estos dispositivos, la vigilancia constante del cielo durante actividades al aire libre y el cálculo aproximado de tiempos de reacción para resguardarse ante posibles impactos. Sin embargo, en ambos territorios, estas capacidades se ven limitadas por el temor a represalias y la presencia de actores armados dentro de las comunidades.

“A uno le da miedo hablar, moverse o incluso decir la verdad, porque puede haber represalias. En mi caso, he tenido amenazas directas y hasta han estado vigilando mi casa, por eso he tenido que sacar a mis hijos. Aquí no hay tranquilidad en ningún momento.” (EAC, Norte de Santander)

La respuesta institucional presenta brechas importantes en cobertura, continuidad y capacidad de acceso. Si bien existen mecanismos de articulación institucional y presencia de autoridades locales, la percepción generalizada es de una respuesta insuficiente frente a la magnitud del riesgo. En **Norte de Santander**, las limitaciones de acceso físico a zonas afectadas, derivadas de la presencia de actores armados, las restricciones a la movilidad y las condiciones de seguridad, res-

tringen significativamente el monitoreo continuo y la atención oportuna a la población afectada. Esto dificulta la verificación de hechos y la implementación sostenida de acciones de respuesta. Por su parte, en **La Guajira** la respuesta frente a hechos de violencia recurrentes sigue siendo limitada, con intervenciones puntuales y discontinuas, escaso seguimiento a los casos y dificultades en la activación efectiva de rutas de atención, lo que restringe el acceso de la población a medidas de protección y a la justicia. En ambos contextos, la respuesta humanitaria complementa parcialmente estas brechas, aunque enfrenta restricciones operativas y de acceso en zonas de mayor afectación.



5.3. Violencias basadas en género

Durante el primer trimestre de 2026, las VBG se mantienen como un riesgo de protección ampliamente presente en el territorio nacional, manifestándose en diversas formas. Algunas de estas violencias se encuentran directamente vinculadas a las dinámicas del conflicto armado, particularmente al control territorial ejercido por los GANE, quienes las utilizan como mecanismos de dominación social y disciplinamiento comunitario, afectando de manera directa la autonomía, integridad y dignidad de mujeres, niñas y adolescentes. Aunque los niveles de reporte varían entre territorios, la evidencia cualitativa sugiere la existencia de un subregistro significativo, asociado al temor a represalias, la normalización de estas violencias y las barreras de acceso a rutas de atención.

En **Nariño**, estas dinámicas se expresan en formas de coerción, reclutamiento y captación, in-

cluyendo prácticas de “enamoramamiento” y ofrecimiento de dinero o bienes dirigidas a niñas y adolescentes, que incrementan su exposición a violencia sexual y otras formas de VBG: “les ofrecen dinero... ellas empiezan a involucrarse... y al final las presionan para irse”. En el **sur de Bolívar**, se relacionan principalmente con la presencia de economías ilícitas, en particular la minería ilegal, donde se evidencian redes de explotación sexual asociadas a estas economías.

“Existe una dinámica de explotación y utilización de mujeres muy marcada... con captación desde otras ciudades bajo engaño.” (EAC, Bolívar)

Las manifestaciones del riesgo incluyen múltiples formas de violencia. En **Nariño**, se reportan amenazas, violencia física y sexual²², así como extorsión asociada a amenazas contra mujeres y

22. En 2025, se reportaron 18 casos de violencia sexual en el marco del conflicto en Tumaco y un caso en Santa Bárbara de Iscuandé, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Violencias de Género [disponible aquí](#).

niñas, y dinámicas de captación y vinculación forzada que afectan de manera diferenciada a niñas y adolescentes. Estas dinámicas incluyen prácticas de captación progresiva mediante manipulación afectiva y normalización de la presencia armada, a través de acercamientos relacionales, ofrecimiento de regalos o apoyo económico y la construcción gradual de vínculos de confianza, particularmente con niñas y adolescentes, que en algunos casos pueden derivar en coerción, violencia sexual o vinculación a actores armados. En el **sur de Bolívar**, las VBG se expresan a través de acoso sexual, explotación sexual, servidumbre y coerción en espacios domésticos y comunitarios. En este contexto, se identifican prácticas de control extremo como la retención de documentos, la incomunicación con redes de apoyo y la imposición de castigos físicos, que refuerzan escenarios de sometimiento prolongado y alta dependencia hacia actores armados.

“Cuando las mujeres menores de edad son reclutadas lo primero que se escucha decir o lo que ellas han nos han contado es que ellas han sido violentadas por ellos también.” (EAC, Nariño)

La afectación se concentra principalmente en mujeres, niñas y adolescentes en ambos territorios, especialmente en zonas rurales, étnicas y de difícil acceso, y se ve agravada por condiciones de vulnerabilidad estructural como la limitada presencia institucional, las condiciones socioeconómicas precarias y la persistencia de normas sociales discriminatorias, así como por dinámicas de silenciamiento que restringen la denuncia. En **Nariño**, comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan riesgos incluso en actividades cotidianas como la recolección de agua o alimentos. En el **sur de Bolívar**, se identifican riesgos



agravados para personas con Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas (OSIEGD), quienes enfrentan estigmatización y control social. En ambos contextos, la participación de mujeres en roles de liderazgo comunitario constituye un factor de riesgo adicional, al incrementar su exposición a amenazas, estigmatización y persecución.

“Todas las mujeres y jóvenes, en el marco del conflicto armado, enfrentamos muchos riesgos. Antes, en el resguardo, podíamos salir sin peligro a lavar la ropa, recoger agua o alimentos; ahora es cuando más miedo sentimos de ser violentadas, porque allí están los grupos. Son precisamente esas actividades, en lugares alejados y solitarios, donde el temor es mayor.” (EAC, Nariño)

Los impactos de estas violencias son profundos y multidimensionales en ambos territorios. A nivel individual, se evidencian afectaciones físicas y psicológicas, incluyendo miedo, ansiedad, deterioro de la salud mental, así como embarazos tempranos y pérdida de autonomía. A nivel familiar, se registran procesos de separación y desintegración, en algunos casos como estrategia de protección. A nivel comunitario, se observa un debilitamiento del tejido social, caracterizado por el aumento de la desconfianza entre miembros de la comunidad y la fragmentación de las redes de apoyo. Asimismo, las restricciones a la movilidad derivadas de la presencia de GANE, se combinan con la autolimitación de la movilidad por parte de mujeres y niñas debido al temor a agresiones, lo que restringe aún más su acceso a servicios de salud, protección y justicia, especialmente en zonas rurales y contextos de control territorial. En Nariño, se reportó incluso un caso de asesinato de una lideresa, lo que ha incrementado el temor colectivo.

La respuesta institucional presenta limitaciones significativas en ambos territorios. Aunque existen rutas formales de atención en salud, protección y justicia, su acceso y efectividad son restringidos, especialmente en zonas rurales y en contextos de control territorial armado. En **Nariño**, se identifican brechas en la disponibilidad de servicios especializados, incluyendo atención en salud mental, así como limitaciones en el seguimiento de casos. En el **sur de Bolívar**, la respuesta se ve aún más limitada por la débil presencia institucional y la desconfianza en la confidencialidad de la información, con percepciones de posible filtración de datos hacia actores armados: “los grupos armados... pagan a los funcionarios de salud por obtener información”. En ambos contextos, el temor a represalias y la impunidad percibida constituyen barreras críticas para la denuncia.

“Esos casos quedan impunes... no hubo respuestas que nos ayuden” (EAC, Bolívar)

Frente a este escenario, las estrategias de afrontamiento adoptadas por la población incluyen medidas de autoprotección individuales y respuestas comunitarias organizadas. En **Nariño**, se recurre a la restricción de la movilidad de mujeres y niñas, la separación familiar y el traslado de adolescentes fuera del territorio como medidas preventivas, así como la no denuncia de los hechos. En **ambos contextos**, la no denuncia de los hechos constituye una estrategia recurrente, asociada al temor a represalias por parte de actores armados. A nivel comunitario, en ambos territorios se identifican iniciativas lideradas por estructuras organizativas, lideresas y consejerías de mujer, orientadas a la sensibilización, el acompañamiento y la referen-

cia de casos. En este contexto, la visibilización de hechos de VBG, en particular de violencia sexual, implica riesgos específicos para quienes promueven su denuncia o reporte, incluyendo amenazas y

presiones directas orientadas a restringir la circulación de información y desincentivar la denuncia, lo que contribuye al subregistro.



5.4. Denegación del acceso a servicios: barreras de acceso a la información

Durante el primer trimestre de 2026, tanto en La Guajira como en el sur de Bolívar persiste el riesgo de denegación de acceso a servicios asociado a barreras de acceso a la información. Este riesgo constituye una limitación estructural para el ejercicio efectivo de derechos, asociada tanto a fallas institucionales como a restricciones territoriales y limitaciones materiales de conectividad.

En ambos territorios, las barreras de acceso a la información responden a una combinación de factores estructurales y fallas en el funcionamiento institucional. En **La Guajira**, destacan debilidades en la difusión de información pública, que se traducen en contenidos incompletos, desactualizados o contradictorios sobre rutas de acceso a servicios, junto con la fragmentación de los canales institucionales y la limitada adaptación cultural y lingüística de la información para pueblos étnicos. En el **sur de Bolívar**, el principal factor impulsor está vinculado a limitaciones estructurales de conectividad y comunicación, como la baja cobertura de red, la inestabilidad del servicio eléctrico y la falta de dispositivos tecnológicos, lo que restringe directamente el acceso a información institucional y favorece la sustitución de canales oficiales por mecanismos informales. Esto incrementa la dependencia de redes no institucionales, elevando el riesgo de circulación de información incompleta o inexacta.

En ambos contextos, se identifican fallas en la comunicación y actualización de la información por parte de las instituciones, incluyendo la ausencia de estrategias adaptadas a las características de la población, la actualización tardía de requisitos y procedimientos y la limitada articulación entre entidades, lo que genera vacíos de información, circulación de información contradictoria y cambios no comunicados oportunamente, con impactos directos en trámites fallidos y pérdida de beneficios.

“Cuando cambia algo, a las personas no se les avisa.” (EAC, Bolívar)

En **La Guajira**, el riesgo se manifiesta principalmente en la falta de información clara, oportuna y culturalmente pertinente sobre rutas de acceso a servicios. A ello se suma la limitada presencia de funcionarios hablantes de lenguas nativas dentro de la institucionalidad, lo que constituye una barrera adicional para la población indígena, particularmente el pueblo Wayuu, al dificultar la comprensión y apropiación de la información en los procesos de acceso a derechos. Se observan errores en trámites administrativos derivados de información incorrecta o desactualizada en instituciones educativas, especialmente en relación con requisitos de regularización migratoria de NNA, lo que ha llevado a familias a solicitar el Permiso por Protección Temporal (PPT) sin contar con certificaciones educativas

requeridas. Esto ha resultado en presentación de documentación incompleta, repetición de trámites y retrasos, así como desplazamientos innecesarios hacia centros urbanos para verificar información o completar requisitos no comunicados previamente. Asimismo, la desinformación afecta el acceso a servicios de urgencia en salud, particularmente en población migrante, debido al desconocimiento de rutas de atención, derechos en emergencias y procedimientos aplicables, lo que puede derivar en demoras o no utilización de servicios disponibles.

En el **sur de Bolívar**, el riesgo se expresa en una circulación desigual de la información, donde solo una parte de la población accede a información institucional oportuna, mientras el resto depende de redes informales como líderes comunitarios, voz a voz o mensajería. Esta intermediación informal implica que la información sea transmitida de forma fragmentada, tardía o inconsistente. Como resultado, las personas enfrentan dificultades para cumplir requisitos o plazos, pierden acceso a programas sociales y deben desplazarse reiteradamente a centros urbanos para verificar información, asumiendo costos económicos y logísticos significativos. Este escenario se ve agravado por el control territorial ejercido por los GANE, que restringe el acceso a la información. Según actores clave, estos grupos controlan canales de conectividad mediante la venta de recargas o acceso a internet, e incluso ejercen prácticas de supervisión como la revisión de teléfonos celulares, configurando un entorno de coerción y autocensura que limita la circulación libre de información dentro de las comunidades. Adicionalmente, se identifica un riesgo potencial asociado al uso de la desinformación con fines políticos en el territorio. Algunas fuentes señalan que, duran-

te periodos electorales, la difusión de información sobre programas sociales y asistencia humanitaria no siempre se realiza de manera equitativa, lo que podría limitar el acceso de ciertas poblaciones. Esto abre la posibilidad de instrumentalización de la información como mecanismo de influencia o control, reforzando dinámicas de exclusión en la respuesta.

“Solo una parte de la comunidad logra enterarse, mientras que la mayoría no tiene conectividad ni los medios necesarios, [lo que hace que] la información circula de manera informal y no siempre llega a tiempo o de forma clara a todos.”

(EAC, Bolívar)

En **La Guajira**, los principales grupos afectados son el pueblo Wayuu, población migrante y retornada, personas con bajos niveles de escolaridad y comunidades rurales dispersas. También se identifican afectaciones específicas en personas adultas mayores y personas con discapacidad, principalmente por barreras digitales y de accesibilidad. En el caso de la población OSIEGD, las dificultades están más asociadas a la discriminación y la falta de información inclusiva. En el **sur de Bolívar**, la afectación es más pronunciada en población rural dispersa, personas con bajos niveles de conectividad, adultos mayores y comunidades (incluso indígenas) con acceso limitado a dispositivos tecnológicos o barreras lingüísticas. En ambos contextos, la combinación entre pobreza, ruralidad y exclusión digital incrementa significativamente la exposición al riesgo.

Las consecuencias del riesgo son convergentes en ambos territorios. Se evidencia una denegación o limitación en el acceso efectivo a servicios de salud, educación y protección social, así como retrasos o imposibilidad en la realización de trámites administrativos y procesos de regularización. A nivel socioeconómico,

se observan costos adicionales por desplazamientos hacia centros urbanos, pérdida de beneficios sociales y debilitamiento progresivo de los medios de vida. Las barreras de acceso a la información también contribuyen al aumento de la desconfianza en las entidades públicas y a la percepción de exclusión. En ambos contextos, estas barreras tienen también impactos psicosociales, incluyendo estrés, ansiedad, sensación de abandono institucional y pérdida de autonomía en la toma de decisiones informadas.

“Muchas veces toca ir hasta el casco urbano para averiguar... no todos tienen acceso a internet, y solo con Facebook no es suficiente para que la comunidad esté bien informada.”

En términos de respuesta institucional y humanitaria, se observan limitaciones significativas en ambos territorios para garantizar el acceso efectivo a información sobre servicios y derechos. En **La Guajira**, se evidencian esfuerzos puntuales de orientación comunitaria por parte de actores humanitarios, incluyendo espacios de socialización de información sobre rutas de acceso a derechos; sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo limitada en su alcance, particularmente en zonas rurales y de frontera, con una cobertura insuficiente frente a las necesidades de información de la población. En el **sur de Bolívar**, la respuesta institucional presenta debilidades similares, caracterizadas por su fragmentación y baja continuidad. Aunque existen me-

canismos formales como jornadas informativas o canales digitales, estos no garantizan una cobertura efectiva ni un acceso equitativo a la información. En ambos contextos, persiste una brecha significativa entre la oferta institucional y las necesidades reales de información de la población.

Las comunidades han desarrollado estrategias principalmente informales y adaptativas para mitigar el impacto de las barreras de información. En **ambos territorios**, se utilizan redes comunitarias, liderazgo local, comunicación de voz a voz y grupos de mensajería como WhatsApp para la circulación de información. En **La Guajira**, los liderazgos comunitarios y Juntas de Acción Comunal desempeñan un rol clave en la difusión de información y la orientación sobre rutas de acceso a servicios, aunque con limitaciones derivadas de las fallas institucionales. En el **sur de Bolívar**, las redes comunitarias y el traslado físico a centros urbanos siguen siendo mecanismos centrales de acceso a información; adicionalmente, se identifican iniciativas puntuales impulsadas por las propias comunidades, como la organización de espacios de socialización de información, orientadas a ampliar el acceso. No obstante, en ambos contextos estas estrategias presentan limitaciones importantes, incluyendo la circulación de información incompleta o errónea, la sobrecarga de líderes comunitarios y la falta de control sobre la calidad de la información transmitida.



6. Recomendaciones

Entidades públicas responsables de implementación (nivel nacional y territorial) (Alcaldías, Gobernaciones, UARIV, ICBF, Secretarías, Comisarías, Ministerio del Interior, sector salud, etc.)

- Fortalecer la presencia institucional efectiva y sostenida en zonas rurales y de difícil acceso, mediante el despliegue regular de equipos móviles y la provisión continua de servicios esenciales, garantizando acceso seguro incluso en contextos de control territorial por GANE.
- Asegurar la continuidad, oportunidad y cobertura de la asistencia humanitaria para población desplazada, priorizando alimentación, alojamiento, apoyo psicosocial y el acceso a medios de vida o estrategias de recuperación temprana, con el fin de reducir la dependencia de mecanismos de afrontamiento de riesgo y prevenir retornos no seguros.
- Implementar mecanismos seguros, confidenciales y adaptados para denuncia y atención, mediante brigadas móviles y puntos discretos que reduzcan riesgos de represalias.
- Integrar la identificación y atención inicial de VBG y salud mental en servicios generales, a través de personal capacitado que actúe como punto de contacto seguro, garantizando confidencialidad, enfoque de acción sin daño y remisiones seguras.
- Fortalecer la prevención y detección temprana de riesgos (ej. reclutamiento, VBG, desplazamiento), incluyendo capacitación de personal local y programas dirigidos a NNA y sus familias.
- Establecer mecanismos de seguimiento y acompañamiento a comunidades en situación de retorno, asegurando condiciones mínimas de seguridad y evitando retornos no seguros.
- Reducir barreras de acceso a información y servicios, mediante estrategias de comunicación claras, actualizadas y comprensibles para la población, el uso de canales no digitales en zonas con baja conectividad, y asegurando coherencia entre entidades.
- Garantizar el acceso efectivo a la justicia, eliminando barreras administrativas y asegurando acompañamiento jurídico y psicosocial, mediante mecanismos seguros y adaptados al contexto, como brigadas móviles para la toma de declaraciones, que garanticen confidencialidad y reduzcan los riesgos de represalias por parte de actores armados.
- Fortalecer el reconocimiento y la interpretación consistente de los ataques con drones dentro del marco de la Ley de Víctimas, asegurando su adecuada tipificación como hechos victimizantes

en el contexto del conflicto armado, de modo que las personas afectadas que hayan realizado declaraciones formales puedan acceder de manera efectiva y homogénea a medidas de reparación integral, incluyendo compensación, atención médica y apoyo psicosocial, evitando vacíos o inconsistencias en su registro y tratamiento institucional.

- Fortalecer los protocolos de manejo seguro de información sensible, garantizando confidencialidad estricta y reduciendo riesgos de filtración que puedan exponer a víctimas y comunidades.

Entidades de protección de derechos (Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Unidad Nacional de Protección)

- Fortalecer el monitoreo y seguimiento de riesgos, incluyendo alertas tempranas y verificación de condiciones en zonas de retorno y alto riesgo.
- Garantizar la protección de liderazgos sociales, especialmente lideresas y personas con OSIEGD expuestas por la visibilización de violencias, mediante esquemas de protección individual y colectiva.
- Promover investigaciones efectivas sobre violaciones de derechos humanos, incluyendo posibles responsabilidades institucionales, y activar mecanismos de control disciplinario para garantizar rendición de cuentas y reducir la impunidad.

Organizaciones comunitarias y estructuras locales (JAC, liderazgos, guardias indígenas, consejerías de mujer, redes comunitarias)

- Fortalecer mecanismos comunitarios de autoprotección y alerta temprana (ej. sistemas locales de monitoreo de riesgos, protocolos comunitarios de respuesta ante amenazas, uso de canales de comunicación seguros y adaptados a contextos de baja conectividad).
- Consolidar redes de apoyo seguras basadas en actores de confianza dentro de la comunidad (como lideresas, docentes, personal de salud, promotoras comunitarias y otros referentes locales) para la orientación, escucha activa y referencia de casos, garantizando el manejo confidencial de la información.
- Promover estrategias comunitarias de difusión de información, asegurando que sea clara, completa y oportuna, incluyendo mediante la articulación con la institucionalidad.
- Facilitar espacios seguros de diálogo comunitario, reduciendo riesgos de silenciamiento sin aumentar la exposición.

Cooperación internacional y organizaciones humanitarias

- Ampliar la cobertura y continuidad de la respuesta en protección, incluyendo servicios de VBG, salud mental y atención a población desplazada.
- Fortalecer capacidades institucionales y comunitarias, mediante transferencia técnica y acompañamiento.
- Apoyar medios de vida y recuperación temprana, para reducir estrategias de supervivencia de riesgo.
- Desarrollar estrategias accesibles de información, adaptadas culturalmente y a contextos de baja conectividad.
- Fortalecer la articulación entre actores, mejorando coherencia y alcance de la respuesta.